

C.A. de Santiago

Santiago, quince de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Gonzalo Maturana González y deduce reclamo de ilegalidad en virtud del artículo 28 de la Ley N° 20.285, en contra de la Resolución contenida en la Carta DEN/LT N° 059/2025, de 10 de febrero recién pasado, emitida por el Ministerio Público, por la cual denegó, ilegal y arbitrariamente la entrega de la información pública solicitada mediante Folios SIAU N° 23463, 23465 y 23466.

Funda su recurso señalando, en síntesis, que el 4 de febrero presentó tres peticiones de información, correspondientes a los Folios SIAU N° 23463, en que se requirió información vinculada al número de ingresos por denuncias relativas a los delitos contemplados en los artículos 361 y 362 del Código Penal en las cuales se hubiera realizado aborto en virtud de lo contemplado en el artículo 119, inciso primero, N° 3 del Código Sanitario, distinguiendo entre el número anual de ingresos de denuncias durante el periodo 2017-2024, tipificación, edad de las víctimas -o, en subsidio, si se trata de una persona mayor o menor de edad-, Región de origen de la denuncia y Fiscalía competente, origen de la denuncia vinculado al sistema privado o público -con indicación del establecimiento que expidió el DAU y del que remitió la denuncia-, estado de las investigaciones e indicación de si se ha aportado el material biológico o fetal por parte del establecimiento de salud. Por su parte, a través del SIAU 23465 se solicitó información respecto del número de oficios enviados por las distintas instituciones de salud del país en el que se informe la interrupción del embarazo por esta causal para que se investigue, separando información por año, Región y si se trata de un establecimiento público o privado.

Por último, mediante SIAU 23466, se pidió información respecto del número de investigaciones que han existido entre los años 2017 y 2024, que respecto de los delitos contemplados en los artículos 361 a 363 del Código Penal, se determinó que la víctima interrumpió el embarazo por la causal de violación contemplada en la Ley N° 20.030, indicando año y delito específico por el cual fue imputado.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DQLXXURXYHX

Agrega que el día 12 de febrero, se notificó la Carta DEN/LT N° 059/2025, que denegó íntegra y absolutamente, la petición de información contenida en las solicitudes referidas, aduciendo que el sistema informático del Ministerio Público no permite determinar, de forma automatizada, si una mujer que fue víctima de un delito de violación interrumpió su embarazo, así como tampoco es posible que el sistema identifique automáticamente si una investigación penal fue iniciada a partir de un oficio de un centro médico o institución de salud, por lo que la entrega de información importaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales, sustentando tal negativa en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

Alega la improcedencia de la causal invocada, por cuanto la entrega de información pública constituye una obligación del Ministerio Público, en virtud de la aplicación del artículo 8° de la Constitución Política de la República, en concordancia con los artículos 4° y 9° de la Ley de Transparencia.

Defiende la importancia de la información solicitada en el marco de la realización de un informe de análisis de impacto e implementación de la Ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, cuestión que adquiere relevancia, además, en el marco de la elaboración de un nuevo reglamento de dicha ley. Considera que las solicitudes efectuadas no responden a una intención antojadiza o carente de fundamento o importancia, sino que resultan vitales para examinar un punto de conexión entre el ámbito médico y el de persecución penal, para otorgar vigencia efectiva a los derechos de las mujeres y víctimas.

Manifiesta que la información requerida tiene el carácter de pública, ya que dice relación con investigaciones penales determinadas y acotadas, susceptibles de ser subsumidas en el artículo 5° inciso final de la Ley de Transparencia, y que la publicidad constituye un principio general en esta materia, por lo que las excepciones legales que importen una restricción o negativa en la entrega de información han de ser interpretadas de forma estricta.

Considera que la causal denegatoria es vaga e imprecisa, ya que omite señalar, con precisión, la hipótesis en la que se funda la causal de secreto o reserva, cuestión que importa la imposibilidad de acreditación fehaciente por



parte del Ministerio Público, aunque, indica que no resulta relevante la identificación de la hipótesis específica aplicable, por cuanto el resultado es invariable, en el sentido que la causal no es procedente.

Hace presente que las solicitudes de información son específicas, por cuanto no sólo indican las normas en las cuales se funda, sino que también el contexto, periodo y datos específicos sobre los cuales recae la petición. Por otra parte, es función del órgano explicar pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de que manera el control ciudadano reflejado en la solicitud de acceso podría afectar el debido cumplimiento de las funciones, sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales, sin que la mera afirmación de la inexistencia de un sistema informático que permita determinar de forma automatizada la información requerida baste para tener por configurada la causal de reserva.

Finalmente, solicita que se acoja el reclamo de ilegalidad y se ordene al Ministerio Público entregar la información solicitada por la reclamante en Folios SIAU N° 23463, 23465 y 23466, con costas.

SEGUNDO: Que evacuando informe al tenor del recurso el Ministerio Público solicita el rechazo de la acción.

Refiere, en síntesis, que el reclamo de ilegalidad tiene su origen en tres solicitudes de información formuladas por Gonzalo Maturana González, de 4 de febrero de 2025, dirigidas a la Fiscalía Nacional, siendo respondidas mediante la Carta DEN LT N° 059/2025, por las cuales se rechazó el acceso a la información requerida, por cuanto el sistema informático del Ministerio Público no permite obtener, de forma automatizada, los datos específicos solicitados, configurándose, por lo tanto, la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.

En cuanto a los fundamentos para denegar la entrega de la información solicitada, manifiesta que ella no está disponible en el sistema informático del Ministerio Público, específicamente, no cuenta con un parámetro de búsqueda que permita determinar si una mujer que fue víctima de un delito de violación interrumpió su embarazo, así como tampoco es posible que el sistema identifique automáticamente si una investigación penal fue iniciada a partir de un oficio de un centro médico o institución de salud.



Agrega que entregar la información implicaría distraer indebidamente a los funcionarios del Ministerio Público de sus labores habituales, pues conllevaría revisar manualmente cada una de las carpetas investigativas de causas penales seguidas por cada uno de los seis códigos que sistematizan en el sistema los delitos de violación y estupro, ingresadas al Ministerio Público entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2024, que ascienden a 62.390 casos, con el único objeto de determinar y sistematizar los datos consultados.

Arguye que la obligación de transparencia pasiva refiere a la entrega de la información con la que actualmente cuenta o posea un servicio público, vale decir, corresponde a una obligación de dar y no una de hacer, pues no es una obligación de los organismos públicos desarrollar informes que impliquen una labor adicional de revisión de carpetas, extracción, sistematización y procesamiento de datos de manera manual para dar respuesta a cada petionario en particular.

Añade que la Fiscalía Nacional no es un centro de datos estadísticos y que no mantiene a su cargo las carpetas investigativas, ya que ello compete a las fiscalías locales, en tanto unidades operativas del Ministerio Público para el cumplimiento de la función institucional, por lo que los requerimientos efectuados hubiesen implicado distraer indebidamente a los funcionarios de sus funciones habituales.

Cita jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia que sustentaría la tesis del Ministerio Público y manifiesta que, en el contexto de la elaboración del informe “¿Garantiza el Estado los derechos de las mujeres? Análisis de impacto de la ley N° 21.030”, del año 2021, se emitió la Carta DEN LT N° 920/2020, de 15 de octubre de 2020, en virtud de la cual se denegó la entrega de la información solicitada en ese momento, por no contar con registros de ella y porque su generación implicaría una revisión manual de cada causa, lo que excede las posibilidades de los recursos humanos y materiales de la institución.

Finalmente, solicita tener por formulados los descargos del Ministerio Público y que se rechace el reclamo de ilegalidad ejercido en estos autos, con costas.



TERCERO: Que, en la especie, se ha reclamado en contra del Ministerio Público porque se ha negado a la solicitud planteada por Gonzalo Maturana Gonzalez a la siguiente información particularizada en los siguientes Folios:

a) SIAU N° 23463, número de ingresos por denuncias relativas a los delitos contemplados en los artículos 361 y 362 del Código Penal, en las cuales se hubiera realizado aborto en virtud de lo contemplado en el artículo 119, inciso primero, numeral tercero del Código Sanitario, distinguiendo entre el número anual de ingresos de denuncias durante el periodo 2017-2024, tipificación, edad de las víctimas –o, en subsidio, si se trata de una persona mayor o menor de edad-, Región de origen de la denuncia y Fiscalía competente, origen de la denuncia vinculado al sistema privado o público – con indicación del establecimiento que expidió el DAU y del que remitió la denuncia-, estado de las investigaciones e indicación de si se ha aportado el material biológico o fetal por parte del establecimiento de salud.

b) SIAU 23465, el número de oficios enviados por las distintas instituciones de salud del país en el que se informe la interrupción del embarazo por esta causal, para que se investigue, separando información por año, Región y si se trata de un establecimiento público o privado.

c) SIAU 23466, el número de investigaciones que han existido entre los años 2017 y 2024, que respecto de los delitos contemplados en los artículos 361 a 363 del Código Penal, se determinó que la víctima interrumpió el embarazo por la causal de violación contemplada en la Ley N° 20.030, indicando año y delito específico por el cual fue imputado.

CUARTO: Que, por su parte, la negativa del Ministerio Público a entregar la información se fundó en la causal contemplada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley N° 20.285, fundándose en que:

a) Ella no está disponible en su sistema informático, específicamente, porque no cuenta con un parámetro de búsqueda que permita determinar si una mujer que fue víctima de un delito de violación interrumpió su embarazo, así como tampoco es posible que el sistema identifique automáticamente si una investigación penal fue iniciada a partir de un oficio de un centro médico o institución de salud público o privado.



b) Implicaría distraer indebidamente a los funcionarios del Ministerio Público de sus labores habituales, pues conllevaría revisar manualmente cada una de las carpetas investigativas de causas penales seguidas por cada uno de los 6 códigos que sistematizan en el sistema los delitos de violación y estupro, ingresadas, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2024, las que ascienden a 62.390 casos, con el único objeto de determinar y sistematizar los datos consultados.

c) La Fiscalía Nacional no es un Centro de Datos Estadísticos y ni tampoco mantiene a su cargo las carpetas investigativas, ya que ello compete a las Fiscalías Locales, en tanto unidades operativas del Ministerio Público para el cumplimiento de la función institucional, por lo que los requerimientos efectuados hubiesen implicado distraer indebidamente a los funcionarios de sus funciones habituales.

QUINTO: Que lo que debe dilucidarse es si el Ministerio Público incurrió en la ilegalidad alegada al negarse a entregar la información solicitada por el señor Gonzalo Maturana Gonzalez. Para tal efecto deben traerse a colación, las normas atinentes a la materia.

SEXTO: Que, en primer lugar, el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República, dispone que: “Son públicos los actos y resoluciones de los Órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Sin embargo, una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la Seguridad de la Nación o el Interés Nacional.”

SÉPTIMO: Que la norma anteriormente transcrita consagra la publicidad como un principio de orden general que rige los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Se trata entonces de un principio constitucional al cual deben someterse las leyes y los reglamentos, pero que permite una excepción y que corresponden a aquellos actos cuyo conocimiento afectaren el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.



OCTAVO: Que, por su parte, el artículo 1° de la Ley N° 20.285, reconoce el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la información. El artículo 5°, reafirma el principio de publicidad y sus excepciones. El artículo 10, otorga a toda persona el derecho a solicitar y recibir la información de cualquier órgano de la Administración del Estado. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a la información contenida en los actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos.

NOVENO: Que de la interpretación armónica de las normas antes citadas se concluye que, conforme a los principios de transparencia y publicidad, procede, por norma general, entregar información, salvo que, efectivamente, ésta se encuentre comprendida en alguna de las causales de excepción al principio de publicidad, como está previsto en la Constitución y la ley.

DÉCIMO: Que, en este orden de ideas, el artículo 21 de la Ley N° 20.285, consagra las causales de excepción al principio de publicidad y en este caso, se ha argüido por parte del Ministerio Público, aquella contemplada en el N° 1 letra c), de la ley antes citada, que dispone que “las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

1.- Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:

c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales”.

UNDÉCIMO: Que la Constitución Política de la República en su artículo 83 conceptualiza al Ministerio Público como “un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual



manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales.”

Lo anterior se ratifica en el artículo 1° de la Ley 19.640, Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público: “el Ministerio Público es un organismo autónomo y jerarquizado, cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. No podrá ejercer funciones jurisdiccionales.”

DUODÉCIMO: Que como puede desprenderse, el objetivo principal del Ministerio Público es la investigación de delitos y ejercer la acción penal pública, lo que realiza, por regla general, a través de las Fiscalías Regionales, lo que depende del territorio en el que tales delitos se cometieron (artículos 7°, 8° y 27 de la Ley N° 19.640).

DÉCIMO TERCERO: Que el Ministerio Público ha argüido que carece de un Centro de Datos Estadísticos y que el Sistema de Apoyo a Fiscales -SAF- no contiene la información solicitada, porque carece de un parámetro de búsqueda, en específico, relativos a si las víctimas de los delitos de violación previstos en los artículos 361 y 362 del Código Penal; interrumpió su embarazo, en caso de estarlo; y si la investigación penal se inició por la denuncia hecha por un Centro de Salud pública o privada. Agrega que, para la entrega de la información, se requeriría hacer una revisión manual de las carpetas, iniciadas el 1 de enero del año 2017 al 31 de diciembre del año 2024, las que ascenderían a un total de 62.390 casos y que al no existir personal especial, debería distraer a funcionarios de sus labores habituales, en las distintas Fiscalías Regionales.

DÉCIMO CUARTO: Que en primer lugar, el Ministerio Público ha reconocido que la información solicitada no se encuentra disponible ni puede ser extraída de su base de datos con un simple parámetro de búsqueda; de modo que esta información no se encuentra disponible y que tal información debería necesariamente extraerse en forma manual, esto implicaría revisar procesos por un período de siete años y respecto de todas las Fiscalías



Regionales, por lo que claramente significa disponer de personal especial para tales labores, del que no cuenta el Ministerio Público, ya que según indica, el total de carpetas a revisar serían más de 62.000; desconociéndose cuanto tiempo llevaría realizar una revisión de esta naturaleza solo para extraer los datos solicitados; pues una vez entregada por todas las Fiscalías, serian menester compilarla y procesarla para su entrega.

DÉCIMO QUINTO: Que, por otro lado, no debe desconocerse que es un hecho público y notorio que para este año el presupuesto del Ministerio Público fue reducido, en forma drástica, lo que implica- con mayor razón- que no puede dedicar personal a reunir la información requerida ,cuando su tarea esencial y exclusiva es la persecución de los delitos, de modo que se corrobora la importancia de no distraer personal del Ministerio Público, en labores extrañas y ajenas, debido a una petición de un ciudadano en particular, restando eficacia, a la labor investigativa y, consecuentemente, la persecución de los delitos mediante el ejercicio de la acción penal pública.

DÉCIMO SEXTO: Que por todo lo precedentemente razonado se concluye que la causal de reserva invocada por el Ministerio Público se encuentra plenamente configurada de modo que el reclamo de ilegalidad será desestimado.

Por estos fundamentos, citas legales y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 1°, 21, 28 de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, se **rechaza**, sin costas, el reclamo de ilegalidad deducido por Gonzalo Maturana Gonzalez en contra del Ministerio Público.

Regístrese y archívese.

Redactó la ministra doña Marisol Andrea Rojas Moya.

Contencioso Administrativo N°147-2025.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DQLXXURXYHX



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DQLXXURXYHX

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Marisol Andrea Rojas M., Jaime Balmaceda E. y Abogado Integrante Luis Hernandez O. Santiago, quince de mayo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a quince de mayo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DQLXXURXYHX